

Santiago, veinticinco de abril de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en lo principal de su líbello don Rodrigo Puchi Zurita, en representación del oponente, Productos Fernández S.A, dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós; dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial que confirmó la del INAPI, aceptando el registro de la marca “Receta de Familia”, para distinguir productos de la clase 29.

Segundo: Que el recurrente luego de hacer una reseña de la causa, de lo resuelto en las oportunidades procesales pertinentes, así como de antecedentes atinentes a las marcas en conflicto señala que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 16 y 20 letras f) y h) de la ley N° 19.039.

Expone básicamente en lo que al artículo 20 letras f) y h) ya señalado se refiere, que la sentencia recurrida infringe dicha disposición al no considerar las semejanzas gráficas y fonéticas de las marcas en conflicto así como la relación de coberturas entre estas, de los registros previos que detenta su representada y lo resuelto en oportunidades anteriores en causas similares a las del presente caso. Asimismo en cuanto a la infracción a las normas de la sana crítica refiere el recurrente lo que doctrinariamente se entiende por esta, y como la sentencia ante las marcas en conflicto y las semejanzas entre estas, no valoró la prueba de acuerdo a dicha forma de valoración porque de haberlo hecho hubiese resuelto en sentido contrario.

Tercero: Que el fallo de segunda instancia que confirma el del INAPI señala en lo que interesa al recurso “Que, entre los signos “RECETAS DE FAMILIA” versus “RECETA DEL ABUELO”, se aprecia que se trata de signos diversos, con su propia individualidad gráfica, fonética y además conceptual, todo



lo cual, permitirá su pacífica coexistencia mercantil”; manteniendo en consecuencia lo que venía resuelto.

Cuarto: Que cabe primero examinar si la sentencia impugnada ha errado en la aplicación de alguna norma reguladora de la apreciación de la prueba rendida en esta causa, única forma en que podrían alterarse las conclusiones de hecho a las que arriba.

Al respecto, solo señala genéricamente que la prueba no se valoró de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no señalando qué precisa regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico habría sido conculcada en la valoración de la prueba rendida en este proceso, sino que más que nada manifiesta su disconformidad con lo resuelto y con la valoración de los antecedentes; lo que de suyo no permite entrar al análisis de la infracción argüida del citado artículo 16 y que, por consiguiente, conllevan su indefectible rechazo.

Quinto: Que como lo ha dicho antes esta Corte, cuando *“el recurso no denuncia el quebrantamiento o desatención de alguna concreta regla integrante de la sana crítica, sino sólo hace una referencia genérica a los distintos tipos o grupos de principios o reglas que la componen”*, lo que ocurre en la especie, *“ni siquiera puede entrarse al estudio de la infracción acusada al citado artículo 16, pues ello supondría que esta Corte, o debería optar, según su criterio, por analizar alguna regla o principio específico de la sana crítica que estime podría ser atinente al caso, sustituyendo la labor que sólo cabe al recurrente o, al contrario, analizar todas las reglas y principios de la sana crítica aceptados por la doctrina y reconocidas en esta materia y pertinentes al caso sub lite, alternativas ninguna de las cuales resulta procedente tratándose de un recurso de derecho estricto como el de casación”* (SSCS Rol N° 45.103-17 de 22 de mayo de 2018, Rol N° 4.250-18



de 30 de enero de 2019 y 4.273-18 de 17 de abril de 2019; Rol N° 13776-19 de 18 de agosto de 2020 y Rol N° 165-20 de 18 de agosto de 2020).

Sexto: Que, al desestimarse una equivocación en la aplicación de la norma que gobierna la valoración de la prueba, deben mantenerse firmes las conclusiones de hecho a las que arriban los jueces del grado de la apreciación del material probatorio, premisas fácticas que claramente no permiten entender configuradas las infracciones de ley denunciadas en el líbello.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil y 20 de la Ley N° 19.039, **se rechaza** el recurso interpuesto en representación del solicitante contra el veredicto del Tribunal de Propiedad Industrial de dieciséis de febrero de dos mil veintidós.

Al primer y segundo otrosí; téngase presente; y al tercer otrosí; a sus antecedentes.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 8969-22.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, veinticinco de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

